JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA

CLASE DE PROCESO:	REIVINDICATORIO
RADICADO No.:	152040I8900I20I80032402
DEMANDANTE:	YEIMY RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DEMANDADO:	MARIA ISABEL TUNARROSA ROMAS
ASUNTO:	APELACION DE AUTO

Tunja, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandada, frente a la providencia de veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022), por medio de la cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Combita, no accede a la declaratoria de pérdida de competencia y la declaratoria de nulidad correspondiente, solicitada por el apoderado de la demandada.

ANTECEDENTES

La señora YEIMY ISABEL RODRIGUEZ presenta demanda reivindicatoria contra MARIA ISABEL TUNARROSA RAMOS, sobre el predio denominado “La Casita” ubicado en la vereda San Isidro del Municipio de Combita, la misma es admitida el ocho (8) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

El dieciséis (16) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el despacho tiene por notificada a la demandada y por no contestada la demanda, teniendo en cuenta que realizó requerimiento en dos ocasiones al abogado Roberto Sandoval quien no había remitido poder en debida forma y en principio, estaba actuando como agente oficioso según las excepciones previas presentadas, indica el despacho que la ratificación de la agencia oficiosa, no se realizó en término.

El doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) se fija fecha de audiencia inicial del art. 372 del C.G.P. a realizarse el 10 de diciembre de dos mil diecinueve (2019), la cual se desarrolla parcialmente, en razón a una apelación interpuesta por el apoderado de la demandante, frente a la decisión del despacho de no dar trámite a las excepciones, por carecer de derecho de postulación en ese momento.

Posteriormente, en obediencia a la decisión del superior, mediante providencia del seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020), el despacho se pronuncia sobre las excepciones previas de falta de legitimación en la causa por pasiva y cosa juzgada las cuales son rechazadas por improcedentes. Decisión que es objeto de recurso de reposición nuevamente, por el apoderado de la demandada, el cual según señala el despacho, el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020) fue remitido de manera errónea, y es rechazado, en razón a que en el cuerpo del correo electrónico remitido el dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020), no es allegado memorial alguno.

El dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado se pronuncia frente a la solicitud del apoderado de la parte pasiva que pretende se realice un control de legalidad, con el objeto de verificar la existencia de falta de competencia y cosa juzgada, además de comunicar el fallecimiento de la demandada la señora MARIA ISABEL TUNARROSA RAMOS y determina que no hay lugar al estudio de excepciones por cuanto ya se tomó una decisión al respecto, y el recurso que aduce el apoderado demandante, no fue recepcionado por el Juzgado, por error atribuible al abogado, al remitirlo de forma equivocada, sin haberse cerciorado oportunamente de esa situación, así mismo, teniendo en cuenta lo manifestado respecto del fallecimiento de su representada, se le requiere para que aporte el respectivo certificado de defunción y la información relacionada con los sucesores de ésta a efectos de la correspondiente citación.

Frente a esta decisión anteriormente referida, nuevamente el apoderado de la demandando presenta escrito de reposición y en subsidio apelación, que es resuelto en providencia de veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), con la que no se accede a la reposición, reiterando los argumentos expuestos en la providencia atacada y además aclarando que en el momento de tomar la decisión de fondo, se hará el respectivo control de legalidad, valorando las pruebas y será está tomada de la forma razonada que corresponda, con lo que no se cercena oportunidad alguna. Se niega la apelación por improcedente y se le requiere al apoderado recurrente para aportar la información relacionada con los sucesores procesales de su representada.

Por conducto de la parte demandante, el 10 de diciembre de dos mil veintiuno es recibido por el despacho el registro civil de defunción, de la señora MARIA ISABEL TUNARROSA RAMOS, junto con los registros civiles de nacimiento de sus herederos RODRIGO TUNARROSA TUNARROSA, MARIA DE LAS MERCEDES TUNARROSA TUNARROSA, JOAQUIN TUNARROSA TUNARROSA, ANIBAL TUNARROSA TUNARROSA, EMELINA TUNARROSA TUNARROSA, ISABEL TUNARROSA TUNARROSA, MARIA DEL ROSARIO TUNARROSA TUNARROSA, DIONILDE TUNARROSA TUNARROSA y EVANGELINA TUNARROSA TUNARROSA, quienes son aceptados como sucesores procesales en auto del tres de febrero de dos mil veintidós (2022).

Por medio del auto del veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022), se fija fecha de audiencia para el trece de julio de dos mil veintidós (2022) en aras de llevar a cabo audiencia inicial y así señalar el decreto pruebas, audiencia que no fue surtida y reprogramada según auto del veintiocho de julio de dos mil veintidós (2022) en razón a que el proceso en su momento se encontraba en proceso de digitalización en la ciudad de Tunja.

Mediante auto proferido el día cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022) el Juzgado Promiscuo Municipal de Combita reprograma audiencia del art. 329 del CGP, teniendo en cuenta la solicitud del apoderado de la parte demandante, el cual indico que por cuenta de un viaje que había programado con antelación, dejando de presente las reservas, en consecuencia, la diligencia es reprogramada para el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

En la mencionada fecha, se lleva a cabo la audiencia inicial en la que el apoderado de la parte demandada señala se debe realizar un control de legalidad dejando de presente que en aplicación del art. 121 frente a la duración del proceso, ya que su apertura fue para el año 2018, y ha tenido dilaciones, ha transcurrido más de un año sin tener un avance óptimo, por tanto señala se está incurriendo en la causal de pérdida de competencia y considera que en ese orden de ideas, el juez de instancia deberá declararse impedido para seguir conociendo ante la falta de competencia.

LA PROVIDENCIA RECURRIDA

La decisión que suscita el recurso que acá se desata, fue proferida en audiencia, el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022), y con ella se decide no declarar la pérdida de competencia solicitada por el apoderado de la parte demandada, teniendo en cuenta que el vencimiento de término para el efecto, sería el 7 de marzo de 2020, además de la devolución de segunda instancia el día 9 de julio de 2019, actuaciones que han impedido que el proceso avance de manera significativa. Se indica que no es viable la pérdida de competencia, conforme al artículo 136 del CGP numeral I, ya que se alega ésta de manera tardía y se le dio continuidad al proceso, sin advertirla en su momento, con lo que termina siendo saneada por las mismas partes.

EL RECURSO

El apoderado de la parte demandada interpone el recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión en razón a que existe un error en la interpretación de la norma en el art. 156 Saneamiento de la Nulidad, indica el despacho perdió automáticamente la competencia y que además emite argumentos erróneos, relaciona una sentencia en contra y refuerza su argumento diciendo que si las peticiones de la parte demandada se hubiesen concedido en su momento, no se alargaría el curso del proceso, pues ha transcurrido más de un año, reitera que hay nulidad si este despacho sigue conociendo sobre el proceso.

El despacho resuelve mantener incólume su decisión, pues expresa que la parte demandada a pesar de tener conocimiento de la nulidad no la alegó en oportunidad, la cual resulta saneada al mantenerse silente, además los recursos interpuestos por la parte demandada han llevado a múltiples aplazamientos a lo largo del proceso, así mismo fueron saneados por la parte demandada según memoriales remitidos al despacho, sumado a la pandemia que de manera obligatoria interrumpió los términos.

El despacho finalmente concede la apelación y corresponde su decisión a este Juzgado, por conocimiento previo.

CONSIDERACIONES

A efectos de decidir sobre la pérdida de competencia solicitada y no declarada por parte del Juzgado de primera instancia, es necesario traer a colación lo relacionado con la duración del proceso, contemplada en el artículo 121 del C.G.P., en el que se determina que, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ya que una vez vencido dicho término, sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá la competencia para conocer del proceso y deberá remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la

providencia dentro del término máximo de seis (6) meses, además de informar al Consejo de la Judicatura, respecto de lo sucedido, determinando además que será nula toda actuación adelantada a partir de ese momento por el funcionario.

La normativa que se trae a colación, tiene como finalidad darle al proceso judicial un término máximo para adelantarse, y con ello beneficiar al destinatario mismo de la administración de justicia, por cuanto no se somete indefinidamente a la decisión de su conflicto, sin embargo, ha sido también contemplado en la jurisprudencia, ciertas razones que hacen que ese término en ocasiones se extienda, dada la complejidad de la controversia a resolver, el nivel de dificultad en el recaudo de pruebas, el volumen de los asuntos asignados a cada despacho, el comportamiento y la actividad litigiosa de las partes y sus apoderados, o problemas administrativos en la oferta de servicios judiciales o en asignación de recursos tecnológicos o físicos, circunstancias estas que son ajenas a la voluntad y actividad del juez y que pueden forzar el aplazamiento de la solución definitiva de los litigios, siendo en estos casos importante, no acudir a la activación de consecuencias adversas por esta tardanza, tanto al operador de justicia, como para las mismas partes, per se.¹

Es decir, cada caso tiene unas particularidades, susceptibles de ser valoradas y por esa misma razón, es que las partes podrán elegir pedir o no, que sea declarada la pérdida de competencia a efectos que otro funcionario continúe adelantando el trámite, y es que debe decirse, que muchas veces, es la actitud procesal asumida por las partes, la que hace que se dilate el proceso continuamente, por cuenta de gran cantidad de recursos, escritos, peticiones que se presentan y que hacen que se extienda el tiempo entre la notificación de la pasiva y el fallo; es decir, hay procesos, en que el Juez mismo, para garantizar la intervención de las partes, ha de dedicar tiempo a pronunciarse incluso repetitivamente sobre lo peticionado por éstas y es ello, lo que genera una tardanza, que no siempre debe terminar en la sanción normativa de la pérdida de competencia.

Ahora bien, es reprochable que, en cualquier proceso, no en el caso particular, las partes, habiendo dejado avanzar el trámite, se mantengan silentes ante una eventual pérdida de competencia, teniendo la posibilidad de alegar la existencia de una nulidad por esa razón, en cualquier tiempo o por ejemplo, al resultarles desfavorable alguna decisión, ya que de permitirse ello, todo proceso estaría sujeto a que cualquiera de las partes alegara una nulidad, a partir del año, o año y medio, en que sea notificada la demanda, reservándose la posibilidad de llevar al traste la actuación, en perjuicio de la administración de justicia, y como se sabe que no es esta la finalidad del artículo 121 del C.G.P. no podrá así aceptarse.

Así mismo, ha de decirse, que en materia procesal, como quiera que se trata de normas de orden público y de imperativo cumplimiento, existen términos y oportunidades para alegar presupuestos legales en favor o en contra por las partes, la dinámica procesal se rige por ello y es así como se garantiza la seguridad jurídica, luego entonces no es de recibo, que una parte alegue en su favor una situación, de manera extemporánea, en perjuicio de la cumplida administración de justicia y del acceso a ésta.

En el caso particular ha de decirse, que el proceso ha tenido una tardanza en su avance, teniendo en cuenta la misma suspensión en razón a la crisis sanitaria por cuenta de la pandemia, la digitalización de la justicia y la implementación de herramientas para ese fin, pero también, la interposición de recursos, el debate en segunda instancia y la solicitud de aplazamiento de las audiencias, siendo evidente que no ha sido injustificado, ni caprichoso el ritmo con el que se ha ido dando la actuación, además de la sucesión procesal, en la cual el apoderado de la demandada, pese a haber sido requerido, no colaboró con el Despacho.

Finalmente, haciendo una síntesis en cuanto a las fechas, ha de precisarse que, la demandada se tuvo por notificada desde marzo de dos mil diecinueve y solo se viene a hacer referencia de la posible pérdida de competencia en audiencia celebrada el veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022), por parte de su apoderado, y ya que ha participado activamente en el proceso, desde marzo de dos mil veinte a la fecha, convalida con ello, la posible pérdida de competencia, que pudiere degenerar en la nulidad consecuente y que ahora alega en su favor.

¹ Sentencia C-443/19

Atendiendo a lo precisado en cuanto al tema en estudio, este Juzgado concluye que no hay lugar a declarar la pérdida de competencia y se dispone devolver las diligencias a efectos que el Juez de conocimiento continúe con el trámite.

RESUELVE:

PRIMERO. Confirmar la decisión de veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022), por lo expuesto.

SEGUNDO. Ejecutoriado este auto, remítanse virtualmente las presentes actuaciones a su Juzgado de origen, dejando las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO VARGAS CIPAMOCHA
Juez Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja²

**JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE TUNJA.**

El anterior auto fue notificado por Estado **No 10**, hoy
DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS
(2023)

CRISTINA GARCIA GARAVITO
Secretaria

Firmado Por:
Hernando Vargas Cipamocha
Juez Circuito
Juzgado De Circuito

² (El presente documento se suscribe de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, por cuya virtud se autoriza la "firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada", en virtud de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional

Civil 02 Oral
Tunja - Boyaca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **730f948b897d3622af483beb0cb56da60db0eb543aa758d38eaae12fe4376916**

Documento generado en 16/03/2023 03:07:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>